



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expte. N°: **48840/2007**

Autos: **“SAGO HADEL ILANCO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”**

Sentencia Interlocutoria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan las actuaciones a sentencia, con motivo del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la resolución de fecha 6 de abril de 2022 que aprueba en cuanto ha lugar por derecho, la liquidación practicada por la parte actora y acompañada con fecha 14/05/21 por la suma de \$ 5.356.960,78, en concepto de capital e intereses no imponibles, por el período comprendido entre el 04/05/05 al 11/02/13 por el beneficio de jubilación y desde el 12/02/13 al 31/03/21 por el beneficio de pensión.

La demandada cuestiona la liquidación aprobada, la imposición de costas a su cargo y los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora por considerarlos elevados.

Por su parte, la Dra. Noemí Di Nardo De Lo Russo apela sus honorarios; sostiene que se encuentran regulados por debajo del mínimo legal, en tanto, de acuerdo a lo dispuesto por ley 27.423 tomando el monto de liquidación aprobada, dividido por el valor de la UMA arroja la cantidad de 744,31 UMA, ese es el resultado a los fines de ubicar en la tabla del art. 21 el porcentaje correspondiente que nunca puede ser inferior al máximo de la escala anterior (que en este caso fija el 20 %) que se reducen en el 50 % en ejecución conforme el art. 41 de la ley arancelaria, ese 10 % da por resultado la suma de \$ 553.697,78 más el 3% del excedente de la escala (es decir hay que adicionar la suma de \$ 16.610,91) arribándose a un total de \$ 570.307,99 equivalentes a 76,66 UMAS que es el mínimo establecido por ley.

En primer lugar, se analizará el memorial deducido por el organismo administrativo.

En referencia a la liquidación aprobada, la generalidad con que se intenta objetarla no resulta idónea a los fines pretendidos, pues no constituye en modo alguno, una impugnación en los términos del art. 504 del C.P.C.C.N., no habiendo demostrado la existencia de error en los números o aplicación del derecho.

Se ha dicho que “aprobada la liquidación en cuanto ha lugar por derecho”, la misma no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Tal revisión, por lo tanto, se limita a los errores de cálculo, pero no a los aspectos de fondo que no fueron planteados al momento de sustanciarse la liquidación (conf. C.N. Civ. Sala B, in re Consorcio de Propietarios Cangallo 2285 c/Wedovot, Enrique y otros, del 23-11-95; C.N. Fed. Civ. Y Com. Sala I, causa 1362, del 28-9-90; C. Nac.Cont. Adm. Fed. Sala I, C.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

24.397/93 “Olmi Goñi, Carlos s/in. Ejec. De sent. del 21-8-96, etc).

A ello cabe agregar respecto a los supuestos errores materiales invocados por la ejecutada, ésta omite practicar las cuentas que a su juicio son las correctas. La impugnación de una liquidación requiere, para ser examinable el suministro de los cálculos correctos y de cuya comparación surgirá el error. Habiéndose omitido tal recaudo se rechaza el agravio.

Sobre las costas, no corresponde hacer lugar al agravio esgrimido de conformidad con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo” Rueda Orlinda c/ ANSeS s/ ejecución previsional”, sentencia del 15 de abril de 2004, ratificado en autos “Becerra Isolina C/ANSeS s/Ejecución Previsional “. B. 668 XXXVII, sentencia del 15/06/04 y “Patiño Raúl Osvaldo” sentencia del 27/05/09.

Entrando al análisis de las críticas vertidas por las partes en relación a la regulación de honorarios, la ley 27.423 en su art. 16 último párrafo establece que los jueces no pueden apartarse de los mínimos previstos en dicho ordenamiento, a los cuales les otorga carácter de orden público.

Por su parte, el art.21 dispone que: “En ningún caso los honorarios podrán ser inferiores al máximo del grado inmediato anterior de la escala, con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde al grado siguiente.”.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que este Tribunal entiende que así como el mínimo arancelario es la primer regla que debe observarse al regular honorarios, en ciertos casos los jueces tienen la posibilidad de compatibilizar su observancia con las pautas de equidad que consagran la primera parte del art. 16 de la ley 27.423 y el art.1255 del C.C. y C.N., con fundamento en las circunstancias concretas y objetivas del caso particular.

Ahora bien, aclarada dicha circunstancia, a fin de verificar en autos el mínimo regulatorio dispuesto en el art. 21 de la ley arancelaria, habremos de recurrir al mecanismo que explica el Dr. Guillermo M. Pesaresi en su obra “Guía práctica Profesional-Honorarios” 3ra. Edición 2021, Editorial Estudio, págs. 410 y siguientes. En igual sentido, Cámara Federal de Mendoza, Sala B en autos “CASTAÑEDA, DANIEL ORLANDO C/ESTADO NACIONAL SENASA S/PROCESO DE CONOCIMIENTO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS” Sentencia Definitiva de fecha 12 de marzo de 2021.

Como primer paso, debe determinarse la Base regulatoria en UMA, es decir, el monto aprobado por la suma de \$ 5.356.960,78 dividido por \$ 4.567 (valor de la UMA a la fecha de cierre de liquidación), ello arroja la cantidad de 1.172,97 UMA (base regulatoria en UMA).

Como segundo paso, se identifica la escala a la que pertenece, la séptima y su escala inmediata anterior que es la sexta.

Luego, con la escala anterior (la 6 °) se calcula el **piso mínimo** por debajo del cual no se puede regular; se toma el porcentaje máximo sobre el valor máximo de UMA (es





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

decir de la escala 6°, porcentaje máximo 17 % de 750 UMA máxima, arroja un total de 127,50 UMA). Así, el piso mínimo es 127,50 UMA.

El cálculo siguiente será el **excedente**: se utiliza nuestra base regulatoria de UMA 1.172,97, menos el máximo de UMA de la escala inmediata anterior que dijimos era 750 UMA, ello arroja la cantidad de **422,97 UMA** ($1172,97 - 750 = 422,97$). Sobre este excedente se aplican los porcentajes máximos y mínimos de la escala correspondiente al caso (escala 7°: mínimo 12 % y máximo 15%), es decir: excedente $422,97 \times 12 \% = 50,75$ **UMA (mínimo)** y excedente $422,97 \times 15 \% = 63,44$ **UMA (máximo)**.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 21, al piso mínimo de 127,50 UMA se le suma el excedente en su porcentaje máximo o en su porcentaje mínimo ($127,50 + 50,75 = 178,25$ UMA MÍNIMO, o $127,50 + 63,44 = 190,94$ UMA MÁXIMO).

Dentro de esos máximos y mínimos (178,25 UMA y 190,94 UMA) se regulará el honorario de acuerdo al caso concreto, que aquí por tratarse de una ejecución de sentencia se aplicará a mitad de la escala (conf. art.41 de la ley 27.423), es decir, el rango del mínimo legal es dentro del mínimo 89,12 UMA y el máximo 95,47 UMA.

De este modo, encontrándose apelados por altos y bajos los honorarios regulados a favor de la representante legal de la parte actora, en atención al monto del proceso, el mérito e importancia de las tareas realizadas en la presente etapa, si tomamos la escala 7° que es la que corresponde de acuerdo a la base regulatoria de autos (1.172,97 UMA) el porcentaje fluctúa del 12 % al 15 % alcanzando a la cantidad máxima de 87,97 UMA. Ello así, el resultado es un valor inferior al mínimo legal anteriormente señalado, motivo por el cual corresponde elevar los emolumentos a la cantidad de 89,12 UMA que a la fecha de la presente resolución asciende a la suma de \$ 1.723.402,56, de conformidad con los arts.16, 21, 24 y 41 de la ley 27.423, con más el IVA en caso de corresponder (conf. C.S.J.N. “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/Acción declarativa” sentencia del 4 de septiembre de 2018 y “Propato Oscar Alberto c/ANSeS s/Reajustes Varios”, Expediente 48811/2009, sentencia del 1 de octubre de 2020).

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1°) Elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora a la cantidad de 89.12 UMA que a la fecha actual asciende a la suma de \$ 1.723.402, 56 con más el IVA en caso de corresponder. 2°) Confirmar la resolución apelada en cuanto ha sido materia de agravios por la demandada; 3°) Costas de Alzada a la demandada vencida (art.68 CPCCN); 4°) Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en el 30 % de la suma fijada por su labor en primera instancia -conf. art. 30 de la ley 27.423-, con más el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación” sent. del 16/06/93) y 5°) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

KPB



#25076339#373244094#20230808184234089